

Señores

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI

E. S. D.

PROCESO: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
DEMANDANTES: MARÍA RUBIELA GRIJALBA Y OTROS.
DEMANDADOS: HÉCTOR FABIO MORA RIVERA Y OTROS.
RADICACIÓN: 760013103003-2022-00250-00

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA mayor de edad, vecino y residente en la ciudad de Cali, e identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.395.114 expedida en la ciudad de Bogotá D.C., abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, con oficina en la Avenida 6 A Bis # 35N – 100 – Centro Empresarial de Chipichape – Oficina 212, en mi calidad de apoderado general de **MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.**, de conformidad con poder adjunto, procedo a contestar la demanda Declarativa de Responsabilidad Civil promovida por la señora María Rubiela Grijalba y Otros en contra MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. y Otros, para que en el momento en que se vaya a definir el litigio, se tengan en cuenta los hechos y precisiones que se hacen a continuación, según las pruebas que se practiquen, anticipando que me opongo a todas y cada una de las pretensiones sometidas a consideración de su Despacho, en los siguientes términos:

FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

AL HECHO 1: A mi procurada no le consta de forma directa que en la fecha señalada por la activa de la acción se hubiera presentado un accidente de tránsito entre los vehículos de placa VCS-574 y KZE-12D como quiera que la misma no tuvo intervención alguna en tal hecho. Que se pruebe.

AL HECHO 2: Es cierto, como consta en el registro civil de nacimiento aportado junto con el libelo gestor.

AL HECHO 3: A mi procurada no le consta en forma directa la veracidad de este hecho, sin perjuicio de ello, es necesario señalar que el simple hecho de que entre dos personas haya una relación sentimental como la que se afirma tenían los señores Jorge Enrique Avila (Q.E.P.D.) y Rubiela Grijalba, no implica, *per se* la existencia de dependencia económica entre estos. Que se pruebe.

AL HECHO 4: Es cierto como se acredita con lo registros civiles de nacimiento de los demandantes y el señor Jorge Enrique Avila (Q.E.P.D.).

AL HECHO 5: A mi procurada no le consta en forma alguna que para el momento de ocurrencia del hecho respecto al cual se sustenta este trámite el señor Jorge Enrique Avila (Q.E.P.D.) se desempeñara como “soldador independiente” ni los ingresos que el mismo presuntamente percibía como contraprestación por tal labor. Pues de ello no obra al interior del plenario prueba siquiera sumaria que permita afianzar lo dicho por la activa de la acción. Que se pruebe. No obstante, no debe pasar inadvertido que de conformidad con el acta de declaración para fines extraprocesales No. 3175-14 del 17 de julio de 2014 el señor Jorge Enrique Avila (Q.E.P.D.) declaró bajo juramento que el mismo era pensionado.

AL HECHO 6: A mi procurada no le consta de forma directa lo sostenido en este hecho como quiera que la misma no tuvo incidencia o participación alguna en los hechos objeto de debate. Que se pruebe.

AL HECHO 7: A mi procurada no le consta de forma directa lo sostenido en este hecho como quiera que la misma no tuvo incidencia o participación alguna en los hechos objeto de debate. Que se pruebe.

AL HECHO 8: A mi procurada no le consta de forma directa lo sostenido en este hecho como quiera que la misma no tuvo incidencia o participación alguna en los hechos objeto de debate. Que se pruebe.

AL HECHO 9: Es cierto como de ello da cuenta el Informe Policial de Accidente de Tránsito.

AL HECHO 10: No es cierto que el conductor del vehículo de placa VCS-574 no hubiere acatado las señales de tránsito, hubiere hecho mal uso del carril, hubiere conducido en exceso de velocidad y no hubiere mantenido la distancia de seguridad, pues tal como se observa en la siguiente imagen tomada del Informe Policial de Accidente de Tránsito, ninguna de estas presuntas causas fue señaladas por el agente de tránsito que atendió el suceso:

10. TOTAL VICTIMAS		CONDUCTOR		PASAJERO		CONSULTANTE		OTROS INTERESADOS	
11. HIPÓTESIS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO									
DEL CONDUCTOR		DEL VEHÍCULO		DEL PEATÓN		DEL PASAJERO			
DE LA VÍA		DE LA VÍA		DE PASAJERO		DE PASAJERO			
OTRA		OTRA		OTRA		OTRA			
12. TESTIGOS									
APELLIDOS Y NOMBRES		DOC.		IDENTIFICACIÓN		DIRECCIÓN Y CIUDAD		TELÉFONO	
APELLIDOS Y NOMBRES		DOC.		IDENTIFICACIÓN		DIRECCIÓN Y CIUDAD		TELÉFONO	
APELLIDOS Y NOMBRES		DOC.		IDENTIFICACIÓN		DIRECCIÓN Y CIUDAD		TELÉFONO	
13. OBSERVACIONES									
Hipótesis 1 y 2 Señalado en la Hoja para uno de los Conductores									

Luego, es claro que la parte actora pretende confundir al Despacho haciéndole ver unas presuntas faltas e imprudencias en la conducción del vehículo de placa VCS-574 que realmente no sucedieron. Que se pruebe

AL HECHO 11: No es cierto que la causa eficiente del daño padecido por el señor Jorge Enrique Avila (Q.E.P.D.) sea en modo alguno imputable al conductor del vehículo de placa VCS-574, como quiera que tal como consta en la siguiente imagen tomada del Informe Policial de Accidente de Tránsito, es claro que no fue posible establecer la hipótesis del accidente que nos convoca en este trámite en cabeza de tal conductor:

10. TOTAL VICTIMAS		CONDUCTOR		PASAJERO		CONSULTANTE		OTROS INTERESADOS	
11. HIPÓTESIS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO									
DEL CONDUCTOR		DEL VEHÍCULO		DEL PEATÓN		DEL PASAJERO			
DE LA VÍA		DE LA VÍA		DE PASAJERO		DE PASAJERO			
OTRA		OTRA		OTRA		OTRA			
12. TESTIGOS									
APELLIDOS Y NOMBRES		DOC.		IDENTIFICACIÓN		DIRECCIÓN Y CIUDAD		TELÉFONO	
APELLIDOS Y NOMBRES		DOC.		IDENTIFICACIÓN		DIRECCIÓN Y CIUDAD		TELÉFONO	
APELLIDOS Y NOMBRES		DOC.		IDENTIFICACIÓN		DIRECCIÓN Y CIUDAD		TELÉFONO	
13. OBSERVACIONES									
Hipótesis 1 y 2 Señalado en la Hoja para uno de los Conductores									

Luego, es claro que las improbadas e hipotéticas imputaciones de responsabilidad que pretende la parte demandante se basan en interpretaciones subjetivas sin asidero probatorio alguno, las cuales únicamente pretenden desdibujar ante el Despacho que el conductor del vehículo de placa antes referida no fue el causante del accidente de tránsito respecto al cual se erige este proceso y adicionalmente, en un intento por confundir a esta Judicatura el extremo actor refiere a diversas hipótesis las cuales no fueron consignadas por el agente de tránsito en el Informe Policial de Accidente de Tránsito. Que se pruebe.

AL HECHO 12: A mi procurada no le consta en forma directa el contenido de este hecho como quiera que la misma no tuvo intervención o injerencia alguna en el traslado ni diagnóstico médico del señor Jorge Enrique Avila (Q.E.P.D.), que se pruebe.

AL HECHO 13: A mi procurada no le consta de forma directa este hecho pues no tuvo intervención o injerencia en la atención clínica brindada al señor Jorge Enrique Avila (Q.E.P.D.).

AL HECHO 14: Es cierto como consta en el registro de defunción adosado al plenario.

AL HECHO 15: Es cierto que el vehículo de placa VCS-574 es propiedad de la sociedad Bancolombia S.A., tal como consta en consulta realizada en el Registro Único Nacional de Tránsito.

AL HECHO 16: A mi procurada no le consta de forma directa esta afirmación. Que se pruebe.

AL HECHO 17: Es cierto, como se acredita con el Informe Policial de Accidente de Tránsito adosado al plenario.

AL HECHO 18: Sólo es cierto en el sentido de que para el momento de ocurrencia del accidente de tránsito ocurrido el 01 de julio de 2022 el vehículo de placa VCS-574 contaba con póliza que amparaba, entre otros, la responsabilidad civil extracontractual derivada de la conducción de dicho automotor. No obstante, debe ser claro para el Despacho que la existencia de un contrato de seguros no implica *per se* la obligación indemnizatoria en cabeza de mi representada. Lo anterior, toda vez que se debe cumplir en primer lugar, con la acreditación del hecho dañino en cabeza del asegurado, elemento este que no se encuentra acreditado al interior del presente trámite. En segundo lugar, que se encuentren agotados los presupuestos de la modalidad de la póliza otorgada por mi procurada, es decir, que los hechos hubieran ocurrido durante la vigencia de la póliza, y, en tercer lugar, que no se configure ninguna exclusión o causal legal o convencional de inoperancia del contrato de seguro.

AL HECHO 19: Respecto a este hecho lo primero sea señalar que el texto de la demanda es ambiguo por cuanto no refiere de forma clara quien es el presunto “*agente dañino*” ello en consideración a que la hipótesis del IPAT no determina de forma precisa a cual de los conductores es atribuible la misma, sin embargo, dotando de una lectura integral el texto de la demanda no es cierto que el conductor del vehículo de placa VCS-574 hubiese frustrado los derechos y actividades de convivencia de los demandantes, pues ciertamente, no obra al interior del expediente elementos que permitan determinar que el mismo fue el responsable de la comisión del accidente de tránsito ocurrido el 01 de julio de 2022, siendo en todo caso necesario señalar que no obra al interior del expediente prueba siquiera sumaria que permita dar cuenta de este presunto perjuicio. Que se pruebe.

AL HECHO 20: Respecto a este hecho lo primero sea señalar que el texto de la demanda es ambiguo por cuanto no refiere de forma clara quien es el presunto “*agente dañino*” ello

en consideración a que la hipótesis del IPAT no determina de forma precisa a cuál de los conductores es atribuible la misma, sin embargo, dotando de una lectura integral el texto de la demanda no es cierto que el conductor del vehículo de placa VCS-574 hubiese causado algún tipo de perjuicio emocional o moral a los demandantes, pues el mismo no fue el responsable del accidente de tránsito respecto al cual se erige este trámite y en todo caso, no obran pruebas que permitan dar cuenta de la existencia de este referido daño o perjuicio. Que se pruebe.

AL HECHO 21: A mi procurada no le consta de forma directa lo afirmado por los demandantes, no obstante, por parte de Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., no se ha efectuado pago alguno con cargo a la póliza.

FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

A LA PRETENSIÓN 5.1. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL: Me opongo a la prosperidad de esta pretensión como quiera que la parte demandante incurre en un error técnico jurídico al solicitar que se declare civilmente responsable a Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., por los perjuicios, presuntamente ocasionados a la parte demandante, evadiendo el hecho de que mi prohilada no tuvo injerencia o participación alguna en el accidente de tránsito ocurrido el 01 de julio de 2022. Resulta pertinente recordar que la responsabilidad civil implica la existencia de un hecho, un daño y un nexo de causalidad entre ambos, sin embargo, mi representada no era la propietaria del vehículo de VCS-574, tampoco un dependiente suyo era quien lo conducía, ni era la empresa a la que estaba afiliado dicho vehículo.

Así pues, mi procurada no tenía relación alguna con tal vehículo, más allá del existente en virtud del contrato de seguro con base en el cual se le demanda. Siendo en todo caso necesario señalar que la misma tampoco ostenta ningún tipo de relación con las demás demandadas a partir de la cual se hubiere pactado la solidaridad convencional. Por consiguiente, mi representada no puede ser condenada en forma alguna como responsable por el accidente y cuando menos de los perjuicios derivados del mismo.

A LA PRETENSIÓN 5.2. DIRECTA DE LA ASEGURADORA: Me opongo a la declaratoria de cualquier tipo de condena en contra de mi procurada como quiera que la activa de la acción no ha cumplido con las cargas procesales impuestas a partir del artículo 1077 del Código de Comercio, como lo son acreditación de la ocurrencia y cuantía del daño, ni a aportado elementos que permitan acreditar la existencia de una responsabilidad civil como la pretendida, a saber, hecho, daño y nexo de causalidad.

A LA PRETENSIÓN 5.3. CONDENAR A PAGAR A TODOS LOS DEMANDADOS LOS SIGUIENTES RUBROS: Me opongo a esta pretensión como quiera que la parte actora se limita a solicitar sendas sumas de dinero sin acreditar la estructuración de una responsabilidad y unos perjuicios como los pretendidos. Sin perjuicio de ello, me pronuncié de forma separada respecto a cada tipología de perjuicios solicitada de la siguiente forma:

- **A LA PRETENSIÓN 5.3.1. LUCRO CESANTE:** Me opongo al reconocimiento de este perjuicio en favor de la demandante, como quiera que la materialización del mismo requiere que se haya ocasionado una pérdida o desventura económica cierta, no obstante, no obra al interior del expediente prueba siquiera sumaria que permita dar

cuenta de que el señor Jorge Enrique Avila (Q.E.P.D.), percibía algún tipo de rédito o emolumento económico por el desarrollo de alguna actividad laboral que el mismo se encontrara desarrollando. Al respecto, no huelga advertir que, de conformidad con el registro civil de nacimiento adosado al plenario, el referido señor tenía la edad de 69 años para el momento de la ocurrencia del accidente de tránsito, por lo que, a la fecha de su fallecimiento, el mismo se encontraba, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 100 de 1996, en edad de pensionarse y tal como refiere la declaración para fines extraprocesales No. 3175-14 del 17 de julio de 2014 suscrita por el señor Jorge Enrique Avila (Q.E.P.D.) el mismo efectivamente era pensionado. Por lo que no le es aplicable la presunción de que cada persona en edad productiva devenga por lo menos un salario mínimo.

Adicionalmente, es necesario advertir que no obra al interior del expediente prueba siquiera sumaria que permita acreditar que la señora María Rubiela Grijalba dependiera económicamente del señor Jorge Enrique Avila (Q.E.P.D.) y en todo caso, de conformidad con consulta realizada en el Registro Único de Afiliados – RUAF, desde el 05 de septiembre de 2022 mediante resolución No. 240952 la demandante es beneficiaria de una pensión de sobrevivencia vitalicia por parte de Colpensiones, siendo claro como la misma no se ha visto afectada o mermada económicamente como consecuencia del accidente de tránsito acaecido el 01 de julio de 2022.

- **A LA PRETENSIÓN 5.3.2. PERJUICIOS MORALES:**

5.3.3. PERJUICIOS MORALES: Me opongo al reconocimiento de los perjuicios morales pretendidos por la activa de la acción como quiera que no obra al interior del expediente elementos probatorios que permitan colegir una responsabilidad como la pretendida por el extremo actor y adicionalmente la pretensión incoada por el extremo actor es abiertamente exagerada y desconoce los parámetros indemnizatorios fijados por la Corte Suprema de Justicia para procesos de mayor gravedad al que nos ocupa, como la muerte, en los cuales tal Corporación ha reconocido como suma indemnizatoria la suma de \$60.00.000 M/Cte.

Sin perjuicio de lo referido en atención, es necesario señalar que en todo caso la póliza mediante la cual se vincula a mi procurada al presente trámite no brinda cobertura en relación a los mismos. Al respecto es necesario advertir que, tal como consta en la siguiente imagen de la cláusula 2.1.19. del condicionado aplicable, se acordó que la Póliza de Automóviles Servicio Público No. 1507122008713, no brindaría cobertura respecto a esta tipología de perjuicios en favor de las víctimas en ninguna forma, luego, al no encontrarse contenida en la misma una cobertura en este sentido no es dable el reconocimiento de suma alguna por este perjuicio.

2.1.19. Los derivados de la pérdida de beneficios y los perjuicios morales del asegurado y de las víctimas en ninguna forma.

5.3.4. PERJUICIO A LA VIDA EN RELACIÓN: Me opongo al reconocimiento de los perjuicios por concepto de daño a la vida de relación pretendidos por la activa de la acción como quiera que, en primer lugar, no obran al interior del expediente elementos probatorios que permitan acreditar que la causa del accidente acaecido el 01 de julio de 2022, hubiera devenido del proceso de conducción del vehículo de placa VCS-574, y en segundo lugar, como quiera que, de conformidad con la Jurisprudencia de la Corte

Suprema de Justicia, la única persona legitimada para solicitar su indemnización es la víctima directa:

*b) Daño a la vida de relación: **Este rubro se concede únicamente a la víctima directa** del menoscabo a la integridad psicofísica como medida de compensación por la pérdida del bien superior a la salud, que le impedirá tener una vida de relación en condiciones normales¹.*

Ante este panorama, es claro como el resarcimiento por concepto de este perjuicio sólo se le reconoce a la víctima directa, no obstante, y como quiera que el mismo falleció no hay lugar a su reconocimiento.

5.3.5. DAÑO A LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD: Me opongo al reconocimiento de este perjuicio en favor de los demandantes, como quiera que adicionalmente a que no se hayan estructurados los elementos propios de la responsabilidad civil extracontractual, y en todo caso no existe daño que dé lugar a indemnización bajo este concepto, ya que no existe ningún tipo de oportunidad cierta que se haya perdido con ocasión al accidente del 01 de julio de 2022.

A LA PRETENSIÓN 5.4. INTERESES DE MORA:

Condena de intereses moratorios a la aseguradora: Me opongo a la prosperidad de esta pretensión, habida cuenta que al no estar acreditada la responsabilidad del conductor del vehículo asegurado en la comisión del accidente de tránsito sobre el cual la parte demandante erige sus infundadas pretensiones en contra de mi procurada no existe obligación alguna que se encuentre a cargo de la misma que pueda generar intereses de mora. En todo caso, debe indicarse que el apoderado de la parte demandante de forma equivocada establece que los intereses moratorios corren a partir de la presentación de la demanda, evadiendo el hecho de que no existe reclamación de ese tipo, la radicación de la demanda o la notificación del auto admisorio, cuando en realidad los mismos sólo pueden configurarse una vez exista mora en el pago de una eventual condena que se encuentre en firme (artículo 1608 del Código Civil), de manera que sólo podrían computarse desde el momento en que se llegare a presentar un incumplimiento en el pago de una sentencia condenatoria ejecutoriada.

Debe tenerse en cuenta que los intereses moratorios sólo pueden cobrarse ante la presencia de una obligación clara, expresa y exigible, sin embargo, para el momento de la presentación de la demanda, se encuentra en discusión precisamente la existencia o no de una obligación, por lo que es a todas luces improcedente pretender que desde ese instante se configuren intereses moratorios.

Condena de intereses moratorios a todos los demandados: Me opongo al reconocimiento de esta pretensión como quiera que al no haberse acreditado la existencia de responsabilidad en la pasiva de la acción no es procedente la imputación de obligación de pago alguna en favor de los demandantes que pudiera ser objeto de intereses.

A LA PRETENSIÓN 5.5. COSTAS Y EN AGENCIAS EN DERECHO: Me opongo a la prosperidad de esta pretensión y, por el contrario, solicito de manera respetuosa al despacho que condene en costas y agencias en derecho a la parte demandante.

¹ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 28 de junio de 2017. Radicación nº 11001-31-03-039-2011-00108-01. M.P. Ariel Salazar Ramírez.

A LA PRETENSIÓN 5.6. INDEXACIÓN: Me opongo a la prosperidad de esta pretensión, habida cuenta que al no estar acreditados los elementos que configuran responsabilidad civil como la pretendida, no existe obligación alguna que se encuentre a cargo de mi representada que pueda ser objeto de indexación y/o actualización.

OBJECCIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO

De conformidad con el Art. 206 de la Ley 1564 de 2012, procedo de manera respetuosa presentar **OBJECCIÓN** frente a la liquidación de perjuicios realizados por la parte actora, la cual fundamentamos en la inexactitud, excesiva y errada forma de tasarlos. De entrada, debe ser claro para el Despacho que cualquier condena por concepto de indemnización de perjuicios resultaría improcedente, en razón a que no existe fundamento fáctico ni jurídico que permita endilgar responsabilidad a la parte demandada en el presente caso. Ahora bien, en el remoto escenario en que el Despacho llegare a atribuir responsabilidad indemnizatoria alguna a mi representada por los supuestos daños padecidos por los demandantes, debe tenerse en cuenta que la estimación de los perjuicios es absolutamente infundada.

Respecto al lucro cesante: Al respecto, es necesario remontarnos a la definición de lucro cesante descrita en el artículo 1614 del Código Civil el cual lo ha definido como *“la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento”*. No obstante, en el caso que nos ocupa no se es posible hablar de la materialización de este perjuicio, habida cuenta de que i) no se identifica ingreso que haya dejado de reportarse por parte de la señora Rubiela Grijalba como consecuencia el referido accidente de tránsito ocurrido el 01 de julio de 2022, ii) de conformidad con la documentación adosada al plenario no se hayan acreditados los ingresos del señor Jorge Enrique Avila (Q.E.P.D.) y iii) no se haya acreditada mediante prueba siquiera sumaria la presunta dependencia económica que la demandante ostentaba respecto a su compañero permanente.

Adicionalmente, objeto la misma en atención a su errada forma de liquidarse, como quiera que se toma como renta actualizada un ingreso que no se haya acreditado, así como tampoco se observa que en dicho valor se hubiere realizado la operación aritmética correspondiente a la actualización de la renta, pues si bien se realiza un incremento del 25% por concepto de prestaciones sociales, no se deduce de dicha suma el 25% correspondiente a los ingresos por concepto de los gatos propios del señor Jorge Enrique Avila (Q.E.P.D.) en concordancia con el IPC. Lo que a todas luces permite evidenciar como al tomar como base para el cálculo actuarial un monto errado toda la operación aritmética realizada tendrá un resultado distinto a aquel que se acompasa con la realidad.

EXCEPCIONES DE MERITO

En primer lugar, es preciso poner en conocimiento del Honorable Juez que la defensa se abordará con la formulación de medios exceptivos divididos en dos grupos. Por un lado, se formularán las excepciones relacionadas con los medios de defensa propuestos con ocasiones al accidente de tránsito propiamente dicho y posteriormente, se abordarán los medios exceptivos que guardan profunda relación con el contrato de seguro. Por lo anterior, se formularán las siguientes excepciones:

EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE A LA INEXISTENTE RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO

A. NO SE ACREDITAN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE SE PRETENDE ENDILGAR AL DEMANDADO POR AUSENCIA DE NEXO CAUSAL

La parte demandante no acreditó que el accidente de tránsito ocurrido el 01 de julio de 2022, hubiere devenido de la responsabilidad del conductor del vehículo de placa VCS-574, pues en el Informe Policial de Accidente de Tránsito, documento que da cuenta de las condiciones tempo espaciales de la ocurrencia de un accidente, se señala que la hipótesis del accidente no pudo ser atribuida a ninguno de los conductores. Sin que, en todo caso, la información de tal documento pueda ser tenida como una declaratoria de responsabilidad.

Uno de los elementos indispensables para declarar la existencia de responsabilidad civil extracontractual, es la acreditación de la ocurrencia de hecho dañoso. Este elemento debe demostrarse de forma clara y fehaciente, pues es la base sobre la cual se cimienta la obligación indemnizatoria. En materia de accidentes de tránsito, el Informe Policial de Accidente de Tránsito es la prueba determinante de su ocurrencia y de las condiciones de tiempo, lugar y vehículos involucrados. Efectivamente, cuando ocurre un accidente se levanta un informe con el fin de esclarecer los hechos y dejar constancia de lo sucedido. Por ello, se considera a dicho informe como un elemento de juicio que permite realizar un análisis del esquema fáctico debido a que precisa las causas del impacto, la identificación de los involucrados, lugar, fecha y hora en que ocurrió el hecho, estado de la vía, huella de frenado, grado de visibilidad, colocación del vehículo, descripción de los daños y lesiones, testigos presenciales, entre otros². Sobre la importancia de acreditar el accidente de tránsito, la Corte Suprema de Justicia ha establecido lo siguiente:

*Era indispensable, en consecuencia, escrutar, a través del acervo probatorio practicado y recaudado, (i) la descripción del lugar de la colisión (vgr. la anchura o uniformidad de la vía, topografía y señales de tránsito del sector circundante antes y después del punto de colisión, el estado del tramo vial); (ii) los factores de importancia en el iter del choque (hora, condiciones atmosféricas, características del flujo vial al momento del impacto, campo de visibilidad, la ubicación de los vehículos luego del suceso, así como su examen mecánico, entre ellos, las señales acústicas y luminosas, las condiciones de los neumáticos, huellas de frenado, detritus de vidrios, fango o barniz desprendidos de los automotores por efectos de la colisión); (iii) **los aspectos atinentes al comportamiento de los involucrados** (averiguado mediante las versiones de éstos o mediante testigos presenciales del hecho); y (iv) **las conclusiones sobre las comprobaciones fácticas acerca de las razones que provocaron el accidente.** ³(negrita fuera del texto original)*

De tal suerte, la declaratoria de Responsabilidad Civil Extracontractual pretende la reparación de perjuicios derivados de un hecho dañoso producido por un tercero, configurándose un vínculo jurídico entre el causante y el afectado. De esa manera, el reclamante en acción extracontractual deberá enlazar su causa y labor demostrativa a **“aducir la prueba de los factores constitutivos de responsabilidad extracontractual,**

² L. 769/2002, art. 149.

³ CSJ, Cas. Civil, Sent. Radicación 73001-31-03-001-2014-00034-01, sep. 20/2019, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.

como son, el perjuicio, la culpa y la relación de causalidad o dependencia que lógicamente debe existir entre los dos primeros elementos enunciados, estando desde luego el demandado en posibilidad de exonerarse de la obligación de que se trata si demuestra un hecho exonerativo de responsabilidad” (CSJ SC del 9 de feb. de 1976). (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Lo anterior, se traduce en que la parte que solicita la indemnización de un perjuicio, no debe conformarse con acreditar la ocurrencia del hecho y del daño que presuntamente reportó con ocasión al accidente, correspondiendo a la parte demandante acreditar la culpa y el nexo causal en las acciones desarrolladas por su contraparte. A su vez, existe consenso en la Jurisprudencia y la Doctrina en cuanto a que, la Responsabilidad Civil Extracontractual pretende la reparación de perjuicios derivados de un hecho dañoso producido por un tercero, configurándose un vínculo jurídico entre el causante y el afectado. Siendo así, la Corte Suprema de Justicia ha determinado los presupuestos para la viabilidad de la acción de reparación por Responsabilidad Civil Extracontractual, saber “a) la comisión de un hecho dañino, b) la culpa del sujeto agente y c) la existencia de la relación de causalidad entre uno y otra”⁴

Ahora bien, la parte actora fundamenta todas las valoraciones de culpa en el Informe de Tránsito del accidente del 01 de julio de 2022, con base en ocho hipótesis de responsabilidad que no se encuentran contenidas en tal documento, de tal suerte, las misma no pueden ser tenidas en consideración, sin perjuicio de ello, es necesario advertir que en todo caso tal documento ni siquiera refiere que la responsabilidad en la ocurrencia del accidente de tránsito hubiera devenido del proceso de conducción del vehículo de placa VCS-574. Al respecto, es necesario poner de presente que este documento carece del valor probatorio que le ha otorgado la parte actora, pues de ninguna manera puede valer como un dictamen de responsabilidad de responsabilidad.

Igualmente, es importante reseñar que **el informe policial no tiene el carácter ni la aptitud legal para brindar conceptos técnicos ni realizar evaluaciones de responsabilidad**, toda vez que el informe de tránsito tiene parámetros definidos en la ley que imponen un límite restrictivo sobre su contenido y las funciones del agente como informante del suceso. Así pues, el artículo 149 de la ley 769 de 2002 establece el contenido del informe policial de la siguiente manera:

Artículo 149: *El informe contendrá por lo menos:*

Lugar, fecha y hora en que ocurrió el hecho.

Clase de vehículo, número de la placa y demás características.

Nombre del conductor o conductores, documentos de identidad, número de la licencia o licencias de conducción, lugar y fecha de su expedición y número de la póliza de seguro y compañía aseguradora, dirección o residencia de los involucrados.

Nombre del propietario o tenedor del vehículo o de los propietarios o tenedores de los vehículos.

Nombre, documentos de identidad y dirección de los testigos.

Estado de seguridad, en general, del vehículo o de los vehículos, de los frenos, de la dirección, de las luces, bocinas y llantas.

⁴ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 03 de diciembre de 2018. Radicación n° 2006-00497-01. M.P. Margarita Cabello Blanco.

Estado de la vía, huella de frenada, grado de visibilidad, colocación de los vehículos y distancia, la cual constará en el croquis levantado.

Descripción de los daños y lesiones.

Relación de los medios de prueba aportados por las partes.

Descripción de las compañías de seguros y números de las pólizas de los seguros obligatorios exigidos por este código.

[...]

Para efectos de determinar la responsabilidad, en cuanto al tránsito, las autoridades instructoras podrán solicitar pronunciamiento sobre el particular a las autoridades de tránsito competentes. (negrita fuera del texto original).

El artículo 146 de la referida ley contiene los parámetros de competencia y procedimiento que deben observarse a la hora de realizar conceptos técnicos acerca de la responsabilidad derivada de un accidente de tránsito, los cuales no se cumplieron en este caso concreto, como se evidencia de la transcripción de la norma:

ARTÍCULO 146. CONCEPTO TÉCNICO. *Las autoridades de tránsito podrán emitir conceptos técnicos sobre la responsabilidad en el choque y la cuantía de los daños. A través del procedimiento y audiencia pública dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación del informe. En caso de requerirse la práctica de pruebas éstas se realizarán en un término no superior a los diez (10) días hábiles, notificado en estrados previo agotamiento de la vía gubernativa.*

De los anteriores artículos, se deduce necesariamente, que **el informe que deben realizar las autoridades de tránsito no incluye, bajo ninguna circunstancia referencia alguna a la responsabilidad de los involucrados, ni siquiera como una posible hipótesis,** pues la competencia frente a pronunciamientos de responsabilidad no recae sobre estas autoridades y la realización de conceptos técnicos de responsabilidad están sujetos a procedimientos especiales, cuya ejecución no se acredita y por ende, fundamentar la responsabilidad de los demandados sobre este tipo de informe carece de legalidad.

En contraste con lo expuesto, en el caso que nos ocupa, se tiene que la parte actora pretende que se declare la existencia de responsabilidad civil en cabeza de la parte pasiva de la acción, debido a los supuestos perjuicios derivados de un accidente de tránsito ocurrido 01 de julio de 2022 de conformidad con el Informe Policial de Accidente de Tránsito, cuando ni siquiera tal documento refiere que la conducta del conductor del vehículo de placa VCS-574 hubiere sido la causa efectiva del accidente de tránsito respecto al cual se cimienta este trámite. Así pues, es claro que al interior de este trámite no se haya acreditado el nexo de causalidad, toda vez que no obra al interior del plenario ninguna prueba que permita evidenciar que el accidente de tránsito fue ocasionado por el conductor del vehículo de placa VCS-574.

Adicionalmente, el artículo 167 del Código General del Proceso, determinó que es deber de las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Siendo claro como el incumplimiento de tal carga procesal consecuentemente deviene en el fracaso de sus pretensiones, no siendo de recibo que el extremo actor pretenda la prosperidad de sus pretensiones con asiento en su exclusivo dicho.

Por otro lado, es preciso advertir que mi procurada no puede ser asemejada en forma alguna al asegurado o al conductor del vehículo asegurado, comoquiera que la obligación de pago, indemnización y/o reembolso se encuentra sujeta a la condición de que se declare, mediante sentencia ejecutoriada, la responsabilidad del conductor del vehículo asegurado o del asegurado. En consecuencia, los fundamentos probatorios que soportan los hechos de la demanda carecen de elementos necesarios, indispensables e indivisibles de la prueba. De este modo, la presente acción carece de elementos de convicción suficientes que lleven al señor juez a determinar que la responsabilidad del accidente recae en cabeza del asegurado.

En conclusión, es claro que al interior del presente trámite no existe prueba alguna de que el fallecimiento del señor Jorge Enrique Avila (Q.E.P.D.) hayan devenido en forma alguna del proceso de conducción del vehículo de placa VCS-574, como quiera que el Informe Policial de Accidente Tránsito no refiere nada al respecto de tal particular ya que no fue posible determinar de forma clara cuál de los dos conductores presuntamente no respetó la señal semafórica roja, por tanto, al ser clara la ausencia de acreditación de los elementos estructurales de la responsabilidad civil extracontractual que se pretende endilgar a la pasiva consecuentemente las pretensiones de la demanda se encuentran abocadas a su fracaso.

Solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

B. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN EN ATENCIÓN A LA CONCURRENCIA DE CULPA

Esta excepción se propone sin perjuicio de la anterior y *subsidiariamente*, toda vez que de conformidad con las circunstancias fácticas respecto a las cuales ocurrió el accidente de tránsito acaecido el 01 de julio de 2022 la parte demandante desconoce que, tanto el señor Jorge Enrique Avila (Q.E.P.D.) como el señor Héctor Fabio Mora Rivera ostentaban la calidad de conductores. Encontrándose ambos en el deber de estar atentos de la vía y las actuaciones de los demás actores a fin de evitar la materialización de hechos como el que nos convoca a este trámite. Es decir, en el hipotético caso en que se declare la existencia de responsabilidad, la eventual indemnización deberá disminuirse en proporción a la participación del demandante en el suceso, esto es, como mínimo en un 50%.

A partir de la Jurisprudencia de las altas Cortes, para el análisis de este tipo de eventos en los que puede llegar a existir concurrencia de culpas en el ejercicio de actividades peligrosas, corresponderá al Juez examinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se produjo el supuesto daño, con el fin de evaluar la equivalencia o asimetría de las actividades peligrosas concurrentes y su incidencia en la cadena de causas generadoras del daño; estableciendo de ese modo, el grado de responsabilidad que corresponde a cada uno de los involucrados, de conformidad con lo establecido en el artículo 2357 del Código Civil, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ARTÍCULO 2357. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN. *La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente.*” (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Ahora bien, cuando el daño es consecuencia de la convergencia de roles riesgosos realizados por la víctima y el agente, el análisis de la contribución de cada uno de los involucrados en la producción del hecho, no debe ser desmesurado ni subjetivo, pues es fundamental establecer la circunstancia incidental que corresponde en este caso.

Ha retomado entonces la Corte Suprema de Justicia⁵ la tesis de la intervención causal, consistente en que la graduación de culpas cuando se está en presencia de actividades peligrosas concurrentes, impone al juzgador el deber de examinar a plenitud las conductas desplegadas por las partes involucradas, para precisar la incidencia en el daño, y consecuentemente, determinar la responsabilidad de uno y otro.

“Más exactamente, el fallador apreciará el marco de circunstancias en que se produce el daño, sus condiciones de modo, tiempo y lugar, la naturaleza, equivalencia o asimetría de las actividades peligrosas concurrentes, sus características, complejidad, grado o magnitud de riesgo o peligro, los riesgos específicos, las situaciones concretas de especial riesgo y peligrosidad, y en particular, la incidencia causal de la conducta de los sujetos, precisando cuál es la determinante (imputatio facti) del quebranto, por cuanto desde el punto de vista normativo (imputatio iuris) el fundamento jurídico de esta responsabilidad es objetivo y se remite al riesgo o peligro (...)”⁶

Así entonces, cuando la causa del daño corresponde a una actividad que se halla en la exclusiva esfera de riesgo de alguno de los sujetos, habría un único responsable; sin embargo, distinto es, cuando concurren ambas actividades peligrosas como causa del daño, determinando la contribución de los involucrados, que implica atenuar el deber de repararlo.

Consecuentemente en el hipotético, remoto y eventual escenario en que esta Judicatura encuentre acreditada la responsabilidad de la pasiva de la acción, deberá seguidamente reducirse el eventual valor indemnizatorio en atención al porcentaje de participación que el señor Jorge Enrique Avila (Q.E.P.D.) tuvo en la producción del hecho lesivo.

Solicito se declare probada esta excepción.

C. TASACIÓN INDEBIDA E INJUSTIFICADA DE LOS SUPUESTOS PERJUICIOS MORALES PRETENDIDOS POR LOS DEMANDANTES

Se propone la presente excepción toda vez que los demandantes pretenden una cuantiosa indemnización con ocasión de unos supuestos perjuicios extrapatrimoniales derivados del accidente de tránsito ocurrido el 01 de julio de 2022, sin que se halle acreditada la materialización de tales perjuicios y desconociendo los rubros tasados y adjudicados por la Corte Suprema de Justicia.

⁵ Corte Suprema de Justicia, sentencia del 12 de junio de 2018, Radicado: 11001-31-03-032-2011-00736-01.

⁶ Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 24 de agosto de 2009, Radicado: 2001-01054-01; igualmente reiterado en sentencias del 26 de agosto de 2010, Radicado: 2005-00611-01, y del 16 de diciembre de 2010, Radicado: 1989-000042-01.

Si bien es cierto que no existen criterios objetivos de aplicación mecánica respecto a la cuantificación de los daños morales, cabe resaltar que los tipos de perjuicios extrapatrimoniales que solicita la parte actora sean reparados económicamente, resultan o tratan de una compleja tipología de perjuicios cuya configuración depende de la existencia de una serie de elementos subjetivos. Lo anterior, además de que su tasación si bien se encuentra deferida “*al arbitrium judicis*”, es decir, al recto criterio del fallador, de todas maneras, deben ser debidamente acreditados, demostrados y tasados por quien los pretende. Teniendo en cuenta adicionalmente, que este tipo de perjuicios “*se trata de agravios que recaen sobre intereses, bienes o derechos que por su naturaleza extrapatrimonial o inmaterial resultan insalvables e incommensurables*”.⁷

Ha señalado igualmente la Corte⁸ que, dentro de la concepción jurídica de los perjuicios extrapatrimoniales, específicamente respecto al daño moral, por ejemplo, no hay una valoración pecuniaria en sentido estricto, ya que al pertenecer a la psiquis de cada persona “*es inviable de valorar al igual que una mercancía o bien de capital*”. De ahí entonces que sea razonable estimar que, (i) en cada caso el Juez realice una valoración concreta, con la debida objetividad y conforme lo que se logre probar en el transcurso del proceso; y, (ii) no resulta apropiado que las partes puedan estimar el valor económico de su propio sufrimiento, “*ya que eso iría en contravía de la naturaleza especial del perjuicio inmaterial o espiritual, que escapa al ámbito de lo pecuniario*”.

Lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia a lo largo de su Jurisprudencia ha establecido unos parámetros para la cuantificación de este. No obstante, desatendiendo a dichos parámetros, el apoderado de la parte demandante solicita se realice el pago del equivalente a 100 smmlv en favor de cada uno de los demandantes. Montos que superan ostensiblemente el valor reconocido por la Corte en casos de extrema gravedad como muerte e invalidez⁹.

Es preciso recordar que la Corte Suprema de Justicia en diversos pronunciamientos en lo que se han presentado casos de muerte, ha señalado lo siguiente: “*Bajo ese contexto, la tasación realizada por esta Corte en algunos eventos donde se ha reclamado indemnización del perjuicio moral para los padres, hijos y esposo(a) o compañero(a) permanente de la persona fallecida o víctima directa del menoscabo, se ha establecido regularmente en \$60.000.000., lo cual implica prima facie que dicha cuantía podrá ser guía para su determinación.*”¹⁰

Así pues, es claro como en casos de gravedad similar al caso que nos ocupa la Corte Suprema de Justicia ha reconocido una suma por mucho inferior a la pretendida por los demandantes, al promulgar los mismos por un reconocimiento económico en favor de cada uno por valor de \$100.000.000 M/Cte., desconociendo los parámetros Jurisprudenciales determinados por el Órgano de cierre de la Jurisdicción ordinaria para tal fin, permitiendo evidenciar el desmedido ánimo de lucro que acompaña a los demandantes en esta acción.

Ha señalado igualmente la Corte¹¹ que, dentro de la concepción jurídica de los perjuicios extrapatrimoniales, específicamente respecto al daño moral, por ejemplo, no hay una

⁷ Sentencia de casación civil de 13 de mayo de 2008, Exp. 1997-09327-01.

⁸ Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia, 11 de mayo de 2017, Radicado: 11001-02-03-000-2017- 00405-00.

⁹ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de septiembre de 2016. Radicación No. 2005-00174. M.P. Ariel Salazar Ramírez.

¹⁰ Corte Suprema de Justicia, Sentencias SC15996-2016 y SC9193-2017.

¹¹ Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia, 11 de mayo de 2017, Radicado: 11001-02-03-000-2017- 00405-00.

valoración pecuniaria en sentido estricto, ya que al pertenecer a la psiquis de cada persona *“es inviable de valorar al igual que una mercancía o bien de capital”*. De ahí entonces que sea razonable estimar que, (i) en cada caso el Juez realice una valoración concreta, con la debida objetividad y conforme lo que se logre probar en el transcurso del proceso; y, (ii) no resulta apropiado que las partes puedan estimar el valor económico de su propio sufrimiento, *“ya que eso iría en contravía de la naturaleza especial del perjuicio inmaterial o espiritual, que escapa al ámbito de lo pecuniario”*.

En conclusión, en este caso específico, conforme a las pruebas obrantes en el expediente, es claro como el extremo actor no solo no probó la configuración del presunto perjuicio moral del cual pretende su indemnización, sino que adicionalmente, sus estimaciones económicas son abiertamente indebidas e injustificadas de conformidad con los parámetros jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia.

Solicito declarar probada esta excepción y desestimar la cuantificación de perjuicios presentada por la parte demandante.

D. INEXISTENCIA DEL LUCRO CESANTE PRETENDIDO POR LA SEÑORA MARÍA RUBIELA GRIJALBA

La parte demandante no acreditó en forma siquiera sumaria la ocurrencia del perjuicio por concepto de lucro cesante, al no haberse allegado certificación laboral, de contador o documento equivalente, que permitiera dar cuenta de que para el momento de ocurrencia de los hechos el señor Jorge Enrique Avila (Q.E.P.D.) se encontraba laboralmente activo. Adicionalmente, tampoco se demostró que la señora María Rubiel Grijalba dependiera económicamente del mismo. En consecuencia, ante la falta de acreditación de estos elementos esenciales, deben negarse las pretensiones de la demanda por este concepto.

La Corte Suprema de Justicia en lo que respecta a los perjuicios patrimoniales ha definido el lucro cesante de la siguiente manera:

*El lucro cesante, jurídicamente considerado en relación con la responsabilidad extracontractual, **es entonces la privación cierta de una ganancia esperada en razón de la ocurrencia del hecho lesivo, o, en palabras de la Corte, “está constituido por todas las ganancias ciertas que han dejado de percibirse o que se recibirán luego, con el mismo fundamento de hecho”***¹². (Negrita y subrayado fuera del texto original)

Se evidencia entonces que la indemnización por lucro cesante tiene lugar cuando a la víctima se le ha reportado una pérdida económica **cierta**, en razón a la ocurrencia del hecho dañino. Sin embargo, no existe al interior de este proceso una prueba fehaciente que permita dar cuenta de que el señor Jorge Enrique Avila (Q.E.P.D.), percibiera algún tipo de rédito o emolumento económico por el desarrollo de alguna actividad laboral que el mismo se encontrara desarrollando y de cuya percepción se hubiese visto privada su compañera permanente como consecuencia de su fallecimiento. Al respecto, no huelga advertir que, de conformidad con el registro civil de nacimiento adosado al plenario, el referido señor tenía la edad de 69 años para el momento de la ocurrencia del accidente de tránsito, por lo que, a la fecha de su fallecimiento, el mismo se encontraba, de conformidad con el artículo

¹² Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 31 de agosto de 2015. Radicación: 2026-514. M.P: Fernando Giraldo Gutiérrez.

33 de la Ley 100 de 1996, en edad de pensionarse y tal como se evidencia en la siguiente imagen tomada de la declaración para fines extraprocesales No. 3175-14 del 17 de julio de 2014 suscrita por el señor Jorge Enrique Avila (Q.E.P.D.) el mismo efectivamente era pensionado, por lo que no le es aplicable la presunción de que cada persona en edad productiva devenga por lo menos un salario mínimo:

ACTA DE DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO PARA FINES
EXTRAPROCESALES
(DECRETO 1557 DEL 14 DE JULIO DE 1.989. ARTICULO 1)
No. 3175 -14

ANTE EL DESPACHO DE LA NOTARIA ENCARGADA VEINTIUNO DE
SANTIAGO CALI, ANDREA MILENA GARCÍA VÁSQUEZ A LOS DIECISIETE
(17) DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL CATORCE (2.014).
COMPARECIÓ: JORGE ENRIQUE AVILA CASTELLANOS Y MARÍA RUBIELA
GRIJALBA.

IDENTIFICADO CON: CON CEDULA DE CIUDADANÍA 14.215.073 – 31.873.699
EXPEDIDA(S) EN IBAGUÉ - CALI (VALLE).

DIRECCIÓN: CARRERA 51 – 20 B/CHAPINERO.

ESTADO CIVIL: UNIÓN LIBRE.

PROFESIÓN U OFICIO: PENSIONADO – AMA DE CASA.

Por otro lado, la parte actora tampoco acreditó que la señora María Rubiela Grijalba dependiera económicamente de su compañero permanente, sobre este particular, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC042-2022 del 07 de febrero de 2022 sostuvo que:

*Ahora bien, en cuanto hace a la segunda modalidad aludida - lucro cesante-, cuando la causa de su producción es el fallecimiento de una persona, la jurisprudencia nacional ha precisado **que el derecho a la reparación surge, en primer término, de la dependencia económica existente entre la víctima y quien reclama la indemnización.** Al respecto, esta Corporación ha explicado que **'lo que confiere el derecho para reclamar el pago de perjuicios materiales de índole extracontractual, (...), es la dependencia económica del reclamante con respecto al extinto, siempre y cuando, claro está, exista certeza de que, dadas las circunstancias, la ayuda o socorro habría continuado de no haber ocurrido su fallecimiento'** (Cas. Civ., sentencia del 7 de diciembre de 2000, expediente 5651; se subraya).*

Así pues, es claro cómo la acreditación del vínculo en calidad de compañeros permanentes no es suficiente a fin de acreditar la dependencia económica alegada por los demandantes, siendo necesario que la activa de la acción enfilara su actividad demostrativa a la acreditación de que la señora María Rubiela Grijalba, más allá de ser la compañera permanente del señor Jorge Enrique Avila (Q.E.P.D) ostentaba una posición de dependencia económica. No obstante, el expediente se encuentra huérfano de elementos que permitan acreditar tal pretensión, no bastando las meras manifestaciones de los demandantes sobre este particular. Sin perjuicio de ello, es necesario advertir que, como consta en la siguiente imagen tomada de consulta realizada en el Registro Único de

Afiliados – RUAF, desde el 05 de septiembre de 2022 mediante resolución No. 240952 la demandante es beneficiaria de una pensión de sobrevivencia vitalicia por parte de Colpensiones, siendo claro como la misma no se ha visto afectada o mermada económicamente como consecuencia del accidente de tránsito acaecido el 01 de julio de 2022:

PENSIONADOS					Fecha de Corte: 2022-12-22	
Entidad Pagadora de pensión	Entidad que reconoce la pensión	Tipo de Pensión	Estado	Tipo de Pensionado	Fecha Resolución	Número Resolución Pension PG
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	Sobrevivencia vitalicia riesgo común	Activo	Régimen de prima media con tope máximo de pensión	2022-09-05	240952

En conclusión, es claro cómo no se materializó el perjuicio pretendido por la parte demandante, como consecuencia de los hechos acaecidos el 01 de julio de 2022, como quiera que i) no se haya acreditado que el señor Jorge Enrique Avila (Q.E.P.D.) se encontrara laboralmente activo para el momento de ocurrencia de los hechos y en todo caso, se haya acreditado que para el momento de ocurrencia del accidente el mismo estaba pensionado ii) no se acreditó que la señora María Rubiela Grijalba dependiera económicamente el referido señor y en todo caso la misma es beneficiaria de una pensión vitalicia de sobreviviente, lo cual aparea que como consecuencia de los hechos sobre los que se erige el trámite no se ocasionaron perjuicios de tipo patrimonial a la demandante que deban ser resarcidos o indemnizados.

Solicito se declare probada esta excepción.

E. IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS POR CONCEPTO DE DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN

En ninguno de los hechos relatados en el escrito de la demanda, la parte actora refiere, de manera puntual y concreta, de qué forma se materializó el *perjuicio “daño a la vida de relación”* de los demandantes en relación a los hechos ocurridos el 01 de julio de 2022. Es decir, no se explica de manera clara y razonada de qué forma y cuáles relaciones exteriores se vieron afectados por el daño alegado. Siendo en todo caso preciso advertir, que esta tipología de perjuicios únicamente es procedente respecto a la víctima directa, no obstante, en este caso la misma falleció, por tanto, no es factible el reconocimiento de este perjuicio en esta instancia procesal. De tal forma que, deben desestimarse las pretensiones de la demanda relativas a este tipo de perjuicio, en virtud del principio de congruencia.

La Corte Suprema de Justicia ha definido el daño a la vida en relación como *“la afectación a la «vida exterior, a las relaciones interpersonales» producto de las secuelas que las lesiones dejaron en las condiciones de existencia de la víctima”* Cabe reseñar que este tipo de daño *“adquiere trascendencia o se refleja sobre la esfera externa del individuo, situación que también lo diferencia del perjuicio moral propiamente dicho”*¹³. Asimismo, la alta Corte ha manifestado que el único legitimado para solicitar su indemnización es la víctima directa:

b) Daño a la vida de relación: **Este rubro se concede únicamente a la víctima directa** del menoscabo a la integridad psicofísica como medida de compensación

¹³ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 13 de mayo de 2008. Exp. 11001-3103-006- 1997-09327-01. M.P. Cesar Julio Valencia Copete

por la pérdida del bien superior a la salud, que le impedirá tener una vida de relación en condiciones normales¹⁴.

Ante este panorama, es evidente que se realiza en la demanda, respecto del reconocimiento del daño a la vida en relación a favor de los demandantes, una solicitud por personas que no tienen legitimación alguna para reclamar la indemnización del referido perjuicio. Sin perjuicio de ello, es preciso resaltar que, sobre el particular ha dicho el Tribunal Superior de Pereira ha señalado¹⁵:

“Cuestionaron los demandados y la llamada en garantía el reconocimiento de este perjuicio, por cuanto las razones para ello fueron idénticas a la utilizadas para reconocer el lucro cesante, además que estimaron quedó sin acreditación la alteración de las condiciones del actor con ocasión de la lesión sufrida” (Folios 9-10 y 97-98, cuaderno No.10).

” Para esta Sala prospera esta alzada, pero por falta de congruencia, puesto que si bien se trata de un perjuicio reclamado (Fisiológico, folio 37, cuaderno principal), lo cierto es que ese hecho en forma alguna se argumentó en la demanda, faltan datos indicativos de cómo se afectaron las condiciones normales de vida del actor.

” La manera en que se advertía ese perjuicio se pretermitió en el escrito introductor y ha debido serlo como garantía del derecho de defensa de los demandados y para respetar el principio de congruencia de la sentencia (Artículo 281, CGP).

En este punto, útil es recordar lo dicho por la Corte Suprema de Justicia¹⁶, en un caso que negó ese pedimento por haberse dado esa omisión:

“En efecto, al observar la demanda aducida y su reforma, integradas en un solo documento, encuentra la Corte que el actor fue quien, desde el comienzo, fusionó tanto el detrimento moral como el de vida de relación, por tanto, el ad-quem, se limitó a pronunciarse alrededor de una sola clase de detrimento; la lectura que brindó a lo expuesto por el demandante refleja, de manera fiel, la forma como se presentó y reclamó la indemnización.

(...)

”Dado que se trata de detrimentos distintos, que no pueden ser confundidos, al ser reclamados debió indicarse un referente económico para cada uno de ellos, aspecto que no se hizo; además, su naturaleza, diferente a la del daño moral, comporta una afectación proyectada a la esfera externa de la víctima, sus actividades cotidianas; relaciones con sus más cercanos, amigos, compañeros, etc., a diferencia de los daños morales que implican una congoja; impactan, directamente, su estado anímico, espiritual y su estabilidad emocional, lo que, sin duda, al describirse en el libelo respectivo de qué manera se exteriorizan, deben mostrarse diversos, empero, como se anunció líneas atrás, su promotor cuando expuso el factum del debate describió unas mismas circunstancias como indicadoras de los dos daños.

“Y, si, en gracia de discusión, la Corte aceptara que en el escrito incoativo fueron pedidos de manera autónoma e independiente los daños morales y de vida de relación, habría que concluir, prontamente, que el impugnante no señaló, puntualmente, de qué

¹⁴ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 28 de junio de 2017. Radicación nº 11001-31-03-039-2011-00108-01. M.P. Ariel Salazar Ramírez.

¹⁵ TSDJ de Pereira. Sentencia 438 de 17-09-2019. Rad.: 05001-31-03-007-2007-00532-01. M.P. Duberney Grisales Herrera.

¹⁶ CSJ. SC7824-2016.

forma se le generó el daño a la vida de relación, pues, como atrás se indicó, NO HUBO SEÑALAMIENTO CONCRETO DE LA REPERCUSIÓN EN EL CÍRCULO O FRENTE A LOS VÍNCULOS DE LA ACTORA. ES MÁS, NO SE APRECIÓ O DESCRIBIÓ, EN PARTICULAR, QUÉ NEXOS O RELACIONES SE VIERON AFECTADAS, SUS CARACTERÍSTICAS O LA MAGNITUD DE TAL INCIDENCIA. Resulta incontrovertible que toda limitación en la salud física o mental de un individuo impacta negativamente su entorno; sin embargo, ante una reclamación judicial, no puede la víctima dejar al Juez conjeturar las repercusiones concretas de esa situación perjudicial y, en el presente asunto, la afectada se despreocupó de indicar las particularidades del detrimento denunciado, luego, no es dable aseverar su existencia real, determinada y concreta.

En suma, al ser un tema que ni siquiera se fundamentó, mal podría reconocerse, habrá de revocarse ese acápite de la sentencia.” (Resaltado fuera de texto).

De lo anterior se desprende que el daño a la vida en relación debe basarse en afirmaciones concretas que den muestra de cuáles son las afectaciones reales que ha sufrido la víctima en sus condiciones de vida. Sin embargo, la parte demandante no acredita de forma real, determinada y concreta la forma en que el accidente de tránsito ocurrido 01 de julio de 2022, afectó la forma en que cada una de las partes que conforman la activa de la acción se vio afectada en su manera de relacionarse de la vida y en todo caso, **esta tipología de perjuicios sólo es procedente respecto a la víctima directa.**

En conclusión, es claro como esta tipología de perjuicios pretendida por la activa de la acción carece de fundamentos fácticos y jurídicos que haga viable su prosperidad, pues los perjuicios por concepto de daño a la vida de relación únicamente se reconocen respecto a la víctima directa, la cual lamentablemente falleció, no siendo de recibo su materialización en esta instancia procesal.

Solicito se declare la prosperidad de esta excepción.

F. IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE LA SUPUESTA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD

La parte actora pretende una cuantiosa indemnización por concepto de la pérdida de oportunidad que presuntamente padecieron los demandantes en atención a los hechos ocurridos el 01 de julio de 2017, sin embargo, no existe daño que dé lugar a indemnización bajo este concepto, ya que no existe ningún tipo de oportunidad cierta que se haya perdido con ocasión al accidente de tránsito respecto al cual se erige este trámite.

Para analizar la viabilidad de la solicitud que eleva la parte actora bajo el concepto de pérdida de oportunidad, resulta pertinente traer a colación los criterios que la Corte Suprema ha desarrollado en su jurisprudencia para identificar la procedencia del reconocimiento de este perjuicio:

Sus presupuestos axiológicos, para que pueda considerarse como daño indemnizable según la elaboración jurisprudencial de esta Corporación refieren a: (i) Certeza respecto de la existencia de una legítima oportunidad, y aunque la misma envuelva un componente aleatorio, la “chance” diluida debe ser seria, verídica, real y actual; (ii) Imposibilidad concluyente de obtener el provecho o de evitar el detrimento por razón de la supresión definitiva de la oportunidad para conseguir el

beneficio, pues si la consolidación del daño dependiera aún del futuro, se trataría de un perjuicio eventual e hipotético, no susceptible del reconocimiento de una indemnización[...]; y (iii) La víctima debe encontrarse en una situación potencialmente apta para pretender la consecución del resultado esperado; no es cualquier expectativa o posibilidad la que configura el daño, porque si se trata de oportunidades débiles, lejanas o frágiles, no puede aceptarse que [...] su frustración inevitablemente conllevaría en la afectación negativa del patrimonio u otros intereses lícitos.¹⁷

Al examinar el presente caso a la luz de los criterios reseñados por la Corte, se hace palmario que no existe ningún tipo de oportunidad cierta que se haya perdido con ocasión al accidente del 01 de julio de 2022. La parte actora se limita solicitar el reconocimiento de este perjuicio sin realizar una mínima labor explicativa acerca de qué fundamenta su pretensión. Se resalta que, en la solicitud, como es de esperarse, no se identifica de forma concreta ningún beneficio económico del que estuviera a la espera la actora y que se hubiere perdido por la ocurrencia del accidente. Debe negarse entonces el reconocimiento de este perjuicio.

Solicito declarar probada esta excepción.

EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE AL CONTRATO DE SEGURO

A. IMPOSIBILIDAD DE ATRIBUIR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN CABEZA DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.

Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., no puede ser considerada como responsable en la comisión de un accidente de tránsito respecto al cual no tuvo participación o injerencia alguna. Máxime, en atención a que su relación con el vehículo de placa VCS-574 para el momento de presunta ocurrencia de los hechos que sirven de base para la acción se circunscribe a las condiciones del contrato de seguro, en el cual no se pactó la solidaridad.

La responsabilidad civil implica la existencia de un hecho, un daño y un nexo de causalidad en entre ambos. Sin embargo, mi representada no se encuentra abocada a esta relación toda vez que no generó de manera directa o indirecta daño alguno a la parte demandante. Razón por la cual, la misma no puede ser condenada en forma alguna como responsable de un accidente en el cual no tuvo participación. De igual forma, mi representada no puede ser asemejada al asegurado en términos de que entre los mismos exista solidaridad, puesto que ésta sólo tiene su fuente en la ley o en los contratos. Sin que en la ley ni en el contrato de seguro suscrito entre mi representada y el tomador se haya establecido la misma.

Resulta pertinente recordar que, de conformidad con el artículo 2344 del Código Civil, si un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa. Sin embargo, tal como ha señalado la Corte Suprema de Justicia¹⁸, la solidaridad es una imposición para los agentes a quienes se les atribuye la autoría de un daño. No obstante, mi representada no era la propietaria del automotor ni sus dependientes lo manejaban.

¹⁷ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 15 de junio de 2016. Rad: 2006-272. (M.P: Margarita Cabello Blanco)

¹⁸ Sentencia SC780-2020. M.P. Ariel Salazar Ramírez.

Recuérdese que la fuente de la solidaridad es la Ley, el testamento o el contrato y en el caso que nos ocupa, no existe norma o pacto que establezca que mí representada deba ser condenada de forma solidaria.

Ahora bien, en lo concerniente a la solidaridad convenida entre las partes, la Corte¹⁹ igualmente se ha ocupado de ella al señalar lo siguiente:

“La solidaridad contractual civil debe ser declarada expresamente cuando la ley no la establece, por ello jamás se presume. De ahí que es un mandato de carácter sustancial, ya que impone una obligación material al responsable solidario frente a los sujetos activos de la relación jurídica.

Ni la prescripción ni la solidaridad son, por lo tanto, elementos “accesorios” de la relación jurídico-sustancial o derecho material. Si la acción sustancial está prescrita el demandante no tiene ningún derecho y el demandado no es civilmente responsable; y si el deudor contractual no es responsable in solidum, entonces no está obligado a pagar el total de la indemnización. Desde luego que se trata de una cuestión fundamental y no de un tema secundario. (Negrilla y Sublínea fuera de texto).

Como se colige del contrato de seguro materializado a partir de la Póliza de Automóviles Servicio Público No. 1507122008713, entre mi procurada y el tomador no se pactó la solidaridad, así como tampoco se señaló que la misma tuviese una relación adicional y/o distinta a la función aseguradora por la misma desarrollada. Lo cual claramente deviene en que no es posible predicar la solidaridad pretendida por la parte demandante. Consecuentemente, mi procurada no puede ser tenida como responsable del accidente de tránsito acaecido el 01 de julio de 2022, pues su relación se limita y circunscribe al contrato de seguro que la misma otorgó en el cual no se pactó la solidaridad.

En conclusión, mi procurada no puede ser tenida como responsable en la comisión del accidente de tránsito respecto al cual se erige el presente trámite como quiera que su relación con el vehículo de placa VCS-574 para el momento de ocurrencia de los hechos se delimitó de conformidad con las condiciones del contrato de seguro sin que en el mismo se haya pactado la solidaridad. Por lo anterior, señor juez, solicito se abstenga de declarar responsable por el accidente a mi representada en un eventual fallo.

Solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

B. FALTA DE COBERTURA MATERIAL DEL CONTRATO DE SEGURO FRENTE A LOS PERJUICIOS INMATERIALES – DAÑO MORAL.

De conformidad con nuestra legislación civil en los contratos de seguro el asegurador cuenta con la facultad de delimitar la extensión de los amparos o coberturas asumidos por el mismo, de tal suerte, este sólo se obligará respecto a aquellos amparos expresamente otorgados. No obstante, de la simple lectura de las condiciones de la Póliza de Automóviles Servicio Público No. 1507122008713, es claro que esta no brinda cobertura respecto a los perjuicios morales.

¹⁹ Ibídem.

En el entendido de que con base al artículo 1056 del Código de Comercio el asegurador puede a su arbitrio, delimitar los riesgos que asume, en reciente fallo del 04 de abril de 2022²⁰ la Corte recordó:

*(...) **ante la amplitud de los eventos que son susceptibles de ser amparados, la aseguradora puede especificar «los riesgos cuya cobertura se obligan en virtud de la misma»** (SC8435, 2 jul. 2014, rad. n.º 2002-00098-01), como lo reconoce el artículo 1056 del Código de Comercio, a saber: «[c]on las restricciones legales, el asegurador pondrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado».*

*Refiriéndose a este precepto, la Corporación dijo que en la especificación de los riesgos **«se reconoce plena autonomía al asegurador, a quien el artículo 1056 ejusdem, norma aplicable a los seguros de daños y de personas, le otorgó la potestad de delimitar espacial, temporal, causal y objetivamente los eventos por cuya ocurrencia se obligaría condicionalmente a indemnizar al beneficiario, pues estatuyó que podía asumir, con las restricciones legales»** (SC4527, 23 nov. 2020, rad. n.º 2011-00361-01).*

(...)

*Estas estipulaciones, conocidas como **«cláusulas de exclusión»**, tienen por finalidad limitar **«negativamente el ‘riesgo asegurado’, al dejar por fuera de cobertura algunas situaciones que podrían estar allí comprendidas y que, por ende, de acontecer no son indemnizables. De tal manera que su consagración no conduce a la desaparición o alteración del componente económico previsto en favor de los beneficiarios, sino a la imposibilidad de que las reclamaciones por los hechos al margen de la protección tengan éxito»** (SC4574, 21 ab. 2015, rad. n.º 2007-00600-02). (Énfasis de autoría)*

Al respecto, resulta oportuno señalar que, a su vez, la Doctrina ha sido pacífica al entender el contrato de seguro como un acto jurídico que proviene de la voluntad de las partes, siendo, por tanto, una expresión del principio de la autonomía de la voluntad privada. De tal suerte, autores como como Castro (2019) han sostenido que:

“Quien celebra un negocio jurídico en virtud de la autonomía privada está creando una nueva relación jurídica, que no existía aún. [...] La autonomía privada únicamente tiene sentido desde el derecho, como la posibilidad de crear, modificar o extinguir relaciones y normas jurídicas. [...] Se trata de un poder normativo, es decir, una potestad de crear normas jurídicas y la autonomía de la voluntad es la fuente de que ellas se derivan”.²¹

Igualmente, como lo explica Ospina Fernández (2005), este postulado se fundamenta en la independencia que otorga el legislador a los particulares para regular sus propias relaciones sociales. En otras palabras, se otorga eficacia jurídica a la iniciativa privada para atribuir los efectos que mejor se enmarquen a su propósito particular²². Así pues, como una

²⁰ Sentencia SC487-2022 del 04 de abril de 2022. M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo

²¹ Castro de Cifuentes, M. (2019). Los contratos normativos y los contratos marco en el derecho privado contemporáneo. Estudios Socio-Jurídicos, 21(1), 121-150.

²² Ospina Fernández, G. (2005). TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO Y DEL NEGOCIO JURÍDICO. Editorial Temis S.A.

manifestación de la autonomía de la voluntad privada, de conformidad con las condiciones particulares y generales del contrato de seguro instrumentado a mediante la Póliza de Automóviles Servicio Público No. 1507122008713, se establecieron los parámetros que enmarcan la obligación condicional que contrajo mi representada delimitando la extensión del riesgo asumido por ella, estipulándose al respecto lo siguiente:

2.1.19. Los derivados de la pérdida de beneficios y los perjuicios morales del asegurado y de las víctimas en ninguna forma.

De tal suerte, a fin de que la póliza respecto a la cual se vincula a mi procurada a este trámite brindara cobertura en relación a los perjuicios inmateriales (daño moral) era necesario que tales amparos y/o coberturas fueran expresamente concertadas, no obstante, de la simple lectura de las condiciones de la póliza se colige como este amparo no fue otorgado por mi procurada, luego, es palmaria la falta de cobertura material respecto a los perjuicios morales, aparejando ello que ante una eventual, remota e hipotética condena en contra de los intereses de mi procurada la misma no podrá ser condena en forma alguna al pago o resarcimiento de tales perjuicios.

Solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

C. CARÁCTER INDEMNIZATORIO DEL CONTRATO DE SEGURO

Como quiera que no se encuentra acreditada la causación de perjuicio alguno en detrimento o afectación de la activa de la acción, no es dable la imposición de obligación indemnizatoria en cabeza de mi procurada. Lo anterior, pues la póliza de seguro respecto a la cual se vincula a Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., cuenta con un carácter meramente indemnizatorio. Lo que deviene en que la misma únicamente podrá afectarse dentro de los límites propios del resarcimiento de los perjuicios efectivamente acreditados.

Nuestro estatuto comercial privilegia y consagra la naturaleza del contrato de seguro como de naturaleza meramente indemnizatoria, determinando al respecto el artículo 1127 del Código de Comercio lo siguiente:

“Art. 1127.-Modificado por la Ley 45 de 1990, artículo 84. Naturaleza del seguro de responsabilidad civil. El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado. (Subrayado y negrita, fuera del texto original)

Son asegurables la responsabilidad contractual y la extracontractual, al igual que la culpa grave, con la restricción indicada en el artículo 1055”. (Subrayas y negrillas fuera del texto original)

En igual sentido, y originariamente la Corte Suprema de Justicia así lo ha establecido, según el fallo del 22 de julio de 1999, expediente 5065 en el que realizó la siguiente referencia,

“Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato.”²³ (Subrayas y negrillas fuera del texto original)

Ahora bien, en atención a que, de conformidad con el acervo probatorio que milita en el expediente no se acreditó la causación de ninguno de los perjuicios pretendidos los demandantes y en atención a que el contrato de seguro tiene como fin último la reparación, indemnización y/o compensación por los daños y perjuicios devenidos a partir de la configuración de un riesgo asegurado. Consecuentemente, no es posible la imposición de obligación alguna en cabeza de mi procurada, pues ello devendría en un enriquecimiento sin justa causa que mi prohijada no se encuentra en la obligación de soportar.

Con fundamento en lo expuesto solicito declarar probada la presente excepción de mérito.

D. DISPONIBILIDAD DE LA SUMA ASEGURADA

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 Código de Comercio, el valor asegurado se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la Aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismo hechos dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que en el evento que para la fecha de la sentencia se ha agotado totalmente el valor asegurado no habrá lugar a cobertura alguna. Solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

E. LÍMITES MÁXIMOS DEL VALOR ASEGURADO

Sin perjuicio de lo expuesto en las excepciones precedentes, en gracia de discusión y sin que la presente constituya el reconocimiento de obligación de mi representada, se formula esta, en virtud de que contractualmente en la póliza utilizada como fundamento para iniciar el presente trámite se estipularon las condiciones de la responsabilidad del asegurador, sus límites, los amparos otorgados, las exclusiones, las sumas aseguradas, etc. Estipulandose como límite máximo del valor asegurado el equivalente a 1000 smlmv.

Ahora bien, es pertinente mencionar que la obligación del asegurador sólo se predicará cuando el suceso esté concebido en el ámbito de la cobertura del contrato, según su texto literal y por supuesto, la obligación indemnizatoria o de reembolso a su cargo se limita a la suma asegurada, siendo este el tope máximo. Además de que también son aplicables todos los preceptos que para los seguros de daños y responsabilidad civil contiene el Código de Comercio, que en su artículo 1079, establece: “...El asegurador no estará obligado a responder sino hasta concurrencia de la suma asegurada...”. Claro está, sin perjuicio del

²³ Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Corte Suprema de Justicia del 22 de julio de 1999, expediente 5065
Magistrado Ponente: Nicolás Bechara Simancas.

respectivo deducible pactado, es decir, de aquella porción que de cualquier pérdida le corresponda asumir al asegurado.

De acuerdo con los artículos 1079 y 1089 del Código de Comercio, la responsabilidad máxima del asegurador se limita a la suma asegurada, de manera que ese es el tope máximo de la responsabilidad asumida por la aseguradora, siempre y cuando no opere una causal de exclusión convencional o legal, como ocurre en el presente caso. Ahora bien, es importante señalar que de conformidad con el condicionado aplicable a la Póliza de Automóviles Servicio Público No. 1507122008713, el valor señalado en la carátula de la misma es el valor máximo asegurado destinado a indemnizar respecto a la muerte o lesiones de una sola persona, ello como se evidencia en la siguiente imagen tomada de la referida:

3.1.5.1.2. "Muerte o Lesiones a una Persona" es el valor máximo asegurado destinado a indemnizar las lesiones o muerte de una sola persona.

Por consiguiente, en caso de ser condenados, existe un tope de la suma fijada en la carátula de la póliza de conformidad con lo concertado, dependiendo de la cobertura y lo anterior para la indemnización de todos los perjuicios. Así pues, en relación al contrato de seguro instrumentado a partir de la Póliza de Automóviles Servicio Público No. 1507122008713, suscrita entre mi procurada y el tomador, es importante señalar que para predicar algún tipo de obligación en virtud de la misma se deberán tener en cuenta los límites máximos de responsabilidad plasmados en ella, los cuales se aprecian en la siguiente imagen tomada de la carátula de la póliza:

COBERTURAS	VALOR ASEGURADO	
1. COBERTURA AL ASEGURADO		
1.1 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS		
	1.000,00	SMLV
MUERTE O LESIONES A UNA PERSONA	1.000,00	SMLV
MUERTE O LESIONES A DOS O MAS PERSONAS	1.000,00	SMLV

Por lo tanto, se aclara que, en el eventual, hipotético y remoto caso en que se determine la existencia de obligación indemnizatoria en cabeza de mi procurada, el valor asegurado de conformidad con la Póliza de Automóviles Servicio Público No. 1507122008713, por el amparo de "*muerte o lesiones de una persona*", equivale a la suma de hasta 1000 smlmv, correspondiendo este el máximo valor al que mi procurada se obligó de conformidad con las condiciones generales y particulares del contrato de seguro antes referido, siendo en todo caso necesario señalar que este amparo solo opera en exceso de los límites de indemnización cubiertos bajo el Seguro Obligatorio de Daños Corporales causados a las personas en accidente de tránsito (SOAT), y en exceso del valor que le sea reconocido por el sistema general de seguridad social en salud y el sistema general de riesgos profesionales.

Solicito declarar probada esta excepción.

F. GENÉRICA O INNOMINADA Y OTRAS

Conforme a lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso²⁴, solicito sea declarada cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, ya sea frente a la demanda o al contrato de seguro utilizado para convocar a mi representada al presente litigio mediante acción directa.

FRENTE A LAS PRUEBAS DEL EXTREMO ACTOR

- **RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS:** El artículo 262 del Código General del Proceso faculta a las partes dentro de un proceso para que, si a bien lo tienen, soliciten la ratificación de los documentos provenientes de terceros aportados por la parte contraria. Vale la pena resaltar que esta disposición establece una clara consecuencia jurídica ante el evento en que una parte solicite la ratificación del documento y ello no se lleve a cabo:

*Artículo 262. Documentos declarativos emanados de terceros. Los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, **salvo que la parte contraria solicite su ratificación.***

Entonces, cabe resaltar que Juez sólo podrá apreciar probatoriamente los documentos cuya ratificación se solicita si efectivamente ésta se hace, como lo consagra el citado artículo. En tal virtud, solicito al Despacho cita a la señora María Rubiela Grijalba, a fin de que ratifique la declaración para fines extraprocesales No. 3175-14 otorgada ante la notaría 21 del círculo de Cali el 17 de julio de 2014.

- **RESPECTO AL TESTIMONIO TÉCNICO:** Me opongo al decreto de esta prueba testimonial como quiera que el mismo no fue testigo presencial de los hechos, por lo que no cuenta con la capacidad de dar cuenta respecto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ocurrencia de los mismos y la información con la que este cuenta ha sido información de oídas la cual ya reposa en el expediente a partir de la incorporación del mentado informe de tránsito, siendo abierta la improcedencia de que su testimonio sea declarado como prueba al interior de este trámite.
- **FRENTE A LA SOLICITUD DE OFICIAR:** Me opongo a la declaratoria de esta prueba como quiera que, en virtud de lo preceptuado en el artículo 173 del Código General del Proceso, el extremo demandante está en la obligación de incorporar en el plenario,

²⁴ **Artículo 282. Resolución sobre excepciones.** En cualquier tipo de proceso, cuando el Juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda.

Cuando no se proponga oportunamente la excepción de prescripción extintiva, se entenderá renunciada.

Si el Juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes. En este caso si el superior considera infundada aquella excepción resolverá sobre las otras, aunque quien la alegó no haya apelado de la sentencia.

Cuando se proponga la excepción de nulidad o la de simulación del acto o contrato del cual se pretende derivar la relación debatida en el proceso, el Juez se pronunciará expresamente en la sentencia sobre tales figuras, siempre que en el proceso sean parte quienes lo fueron en dicho acto o contrato; en caso contrario se limitará a declarar si es o no fundada la excepción.

todas las pruebas que pretenda hacer valor dentro del debate procesal, sin que sea posible delegar dicha actividad demostrativa al Juzgado; así lo indica la norma:

“(...) Artículo 173. Oportunidades probatorias

Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código.

*En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que estas hayan aportado. **El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente (...)**”*
Sublínea por fuera del texto original.

La norma citada es clara en advertir que, sin lugar a que existan dudas sobre esta carga procesal, es a la parte interesada a quien atañe la obligación de obtener los documentos que pretende hacer valer como prueba. En este caso, los accionantes tenían el deber de conseguir y aportar los elementos de convicción que acreditaran sus aseveraciones al expediente junto con el documento contentivo de la escrito demandatorio; esta, de ninguna manera es una carga que se pueda endilgar o trasladar al Despacho judicial, siendo claro cómo no obra al interior del expediente derecho de petición mediante la cual la parte demandante hubiera pretendido la obtención del expediente del proceso penal del cual solicita su oficio.

- **FRENTE A LA INSPECCIÓN JUDICIAL:** Me opongo a la declaratoria de esta prueba como quiera que al tratarse de un accidente de tránsito ocurrido hace más de cinco años, es apenas lógico que las condiciones viales hayan variado, así como la estructura, señales, dirección y mantenimiento de la vía, por lo que el realizar una inspección al lugar de los hechos luego de tantos años no aportará elementos nuevos al presente trámite, ni podría ser factor determinante para este asunto en atención a la variación de la vía con el paso de los años.

Sin perjuicio de ello, en todo caso, es preciso advertir que de conformidad con el artículo 236 del Código General del Proceso esta prueba sólo se ordenará cuando sea imposible verificar los hechos mediante cualquier otro medio prueba, no obstante, el objeto de la prueba pretendida por la activa de la acción se puede constatar, verificar o conocer a partir del Informe Policial de Accidente de Tránsito, el cual da cuenta de las circunstancias de tiempo modo y lugar de ocurrencia de un accidente de tránsito, por lo que la prueba pretendida resulta innecesaria.

- **FRENTE AL DICTAMEN PERICIAL:** Me opongo a la declaratoria de esta prueba pues la misma desconoce el contenido de los artículos 167 y 226 del Código General del Proceso, como quiera que la parte actora se relega de su carga probatoria obviando que de conformidad con lo establecido en el artículo 227 del Código General del Proceso *“La parte que pretenda valerse de un dictamen pericial deberá aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas”* no obstante, la parte contraria, se limita a solicitar a esta Judicatura la práctica de pruebas que el mismo debió haber llegado al trámite en la oportunidad procesal correspondiente a la formulación de la demanda.

RESPECTO A LA SOLICITUD DE INVERSIÓN DE LA CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA

Me opongo a que el Despacho invierta la carga de la prueba como quiera que, la solicitud de la parte demandante es abiertamente improcedente al pretender que en contra de quienes se erige la acción acrediten su propia culpa y el nexo de causalidad de sus acciones respecto a las consecuencias del accidente de tránsito ocurrido el 01 de julio de 2022, si bien es cierto que, se puede solicitar la inversión de la carga de la prueba ello es respecto a la obtención de objetos de pruebas, documentación técnica o por haber la parte intervenido en los hechos que dieron origen al litigio, sin embargo, ninguno de estos presupuestos se cumplen pues mi procurada no tiene en su poder ninguna documentación o información distinta a aquella que reposa en manos de los demandantes, de tal suerte, so pretexto de un presunto estado de incapacitada mental, sin que medie elemento probatorio alguno, no es de recibo pretender que la parte demandada deba acreditar su propia culpa y nexo de causalidad, pues la parte demandante quedaría relegada de su posición activa de la acción a una mera espectadora de su propia intención.

Es precio recordar que en relación a la responsabilidad civil extracontractual esta pretende la reparación de perjuicios derivados de un hecho dañoso producido por un tercero, configurándose un vínculo jurídico entre el causante y el afectado, siendo así la Corte Suprema de Justicia ha determinado los presupuestos para la viabilidad de la acción de reparación por responsabilidad civil extracontractual, saber “a) la comisión de un hecho dañino, b) la culpa del sujeto agente y c) la existencia de la relación de causalidad entre uno y otra”²⁵ no obstante el declara la parte actora que los dos elementos fundantes de la responsabilidad civil sean probados por aquellos en contra de quienes se erigen las pretensiones de la demanda devendría en una vía de hecho por defecto sustancial.

RESPECTO A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA DEMANDA

Me opongo a la inscripción de la medida cautelar solicitada por el extremo y en su lugar, con fundamento en el artículo 590 del Código General del Proceso, comedidamente solicito al Despacho se sirva fijar caución.

MEDIOS DE PRUEBA

Solicito a este honorable despacho se sirva decretar y tener como pruebas las siguientes:

1. DOCUMENTALES

- a) Certificado de existencia y representación legal de en el que figuro como apoderado general de la compañía.
- b) Copia de la escritura pública No. 1804 del 20 de junio de 2003 otorgada ante la notaría treinta y cinco del círculo de Bogotá mediante la cual se me otorga poder general por parte de MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.
- c) Copia de la Póliza de Automóviles Servicio Público No. 1507122008713 con sus condiciones particulares y generales.
- d) Copia de consulta realizada en la base de datos del Registro Único de Afiliados – RUAF.

²⁵ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 03 de diciembre de 2018. Radicación n° 2006-00497-01. M.P. Margarita Cabello Blanco.

- e) Constancia de radicación del derecho de petición presentado ante Colpensiones a fin de conocer, entre otros, a cuanto corresponde la mesada pensional de la señora María Rubiela Grijalba.

2. DECLARACIÓN DE PARTE

En virtud de lo establecido en el artículo 198 del Código General del Proceso, solicito se decrete la declaración de parte del Representante Legal de Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., a fin de que sea interrogado sobre los hechos relacionados con el proceso.

3. INTERROGATORIO DE PARTE

Respetuosamente solicito ordenar y hacer comparecer a su despacho a los señores María Rubiela Grijalba, Doris Eugenia Avila Castellanos, Fernando Antonio Avila y Gloria Stella Avila Castellanos, así como al señor Héctor Fabio Mora Rivera y a los representantes legales de Bancolombia S.A. y Grupo Integrado de Transporte Masivo S.A., para que absuelvan el interrogatorio que de forma escrita o verbal les formularé respecto a los hechos de la demanda, sus respectivas contestaciones y las excepciones propuestas.

4. TESTIMONIOS

Siguiendo lo preceptuado por los artículos 208 y ss. del Código General del Proceso, solicito al señor Juez se sirva decretar la práctica de siguiente testimonio de Jinneth Hernández Galindo, identificada con la cédula de ciudadanía No. 38.550.445, quien tiene domicilio en la ciudad de Cali, y puede ser citada en la calle 4 No. 75-71, apto. 504 de la ciudad de Cali, cuyo objeto de prueba del testimonio será declarar sobre las condiciones generales y particulares de Póliza de Automóviles Servicio Público No. 1507122008713, los límites pactados, los deducibles concertados, y sobre los demás aspectos que resulten relevantes al presente proceso judicial.

5. INTERVENCIÓN EN DOCUMENTALES Y TESTIMONIOS

Adicionalmente con el objeto de probar los hechos materia de las excepciones de mérito, me reservo el derecho de contradecir las pruebas documentales presentadas al proceso y participar en la práctica de las testimoniales que lleguen a ser decretadas, así como del correspondiente interrogatorio de parte e intervenir en las diligencias de ratificación y otras pruebas solicitadas.

6. DICTAMEN PERICIAL

Comedidamente anuncio que me valdré de prueba pericial de reconstrucción de accidente de tránsito a fin de ofrecer al despacho una ampliación frente a las circunstancias en las cuales se presentó el accidente, realizando un análisis exhaustivo y detallado de las pruebas que obran en el expediente, para finalmente realizar un estudio de los factores que, según su experticia, determinen la causa eficiente del mismo. Esta se solicita y se anuncia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 227 del Código General del Proceso, pues a la fecha no me es posible aportarla dada la complejidad técnica del mismo.

En virtud de lo anterior, respetuosamente solicito al Despacho que se le conceda a mi representada un término no inferior a dos meses con el fin de aportar dictamen pericial realizado por un perito experto en el tema, el anterior termino, se justifica teniendo en cuenta la complejidad de dicho dictamen, pues se hace necesario realizar un estudio minucioso a fin de lograr la reconstrucción requerida. El dictamen es conducente, pertinente y útil, teniendo en cuenta que el mismo podrá aclarar las circunstancias fácticas que intervinieron en el accidente de tránsito, las cuales, una vez analizadas, podrán determinar la causa eficiente del mismo.

De conformidad con lo expuesto, respetuosamente solicito al H Juez, proceder de conformidad.

7. PRUEBA POR OFICIO

Respetuosamente solicito al Despacho se oficie a Colpensiones, para que con destino a este proceso remita copia auténtica e íntegra, física o digital, de la resolución a partir de la cual se reconoce la pensión de Sobrevivencia vitalicia por riesgo común a la señora María Rubiela Grijalba. Esta solicitud se formula teniendo en cuenta que no fue posible obtener esta información por vía del Derecho de Petición que fue efectivamente radicado ante la mencionada entidad en cumplimiento de lo ordenado por el numeral 10 del artículo 78 del Código General del Proceso.

NOTIFICACIONES

Por la parte actora serán recibidas en el lugar indicado en su escrito de demanda. Por los demás demandados donde indiquen en sus respectivas contestaciones.

Por mi representada Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. se recibirán notificaciones en la carrera 14 No. 96-34 de Bogotá, dirección de notificaciones njudiciales@mapfre.com.co.

Por parte del suscrito se recibirán notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en la Avenida 6A Bis No. 35N-100, Centro Empresarial Chipchape, Oficina 212 de la ciudad de Cali. Email: notificaciones@gha.com.co

Cordialmente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA.

C.C. 19.395.114 de Bogotá.

T.P. 39.116 el C.S. de la Jra.